

El seguimiento de los espías de Franco a los opositores universitarios (1974-1975)

Ernesto Villar Cirujano

*Villanueva C.U. Universidad Complutense de Madrid. España
evillar@villanueva.edu*

Resumen

La lucha contra el Franquismo tuvo en la universidad española uno de sus escenarios más activos, lo que obligó a los agentes del Servicio Central de Documentación (SECED), la agencia de inteligencia del Gobierno, a hacer un seguimiento permanente de los opositores. A través de los informes confidenciales que se enviaban a las altas autoridades, los llamados Boletines de Situación, se puede ver hasta qué punto estos servicios de información tenían constancia de todos los actos de protesta que se realizaban, aunque no siempre disponían de los medios y la capacidad para impedirlos.

Palabras clave: Servicios secretos, SECED, Franquismo, Universidad. Comunismo.

The Pursuit of Franco's Secret Agents to Opponents in the University (1974-75)

Abstract

The fight against Franco's Dictatorship in Spain had in the university one of the most active fronts, what forced agents of Servicio Central de Documentación (SECED), the Government's secret agency, to do a permanent follow-up to opponents. In confidential reviews sent to

authorities, known as Boletines de Situación, is possible to verify how this secret services knew all the protests, although sometimes they had not the capacity to stop their consequences.

Keywords: Secret services, SECED, Francisco Franco, University, Communism.

1. INTRODUCCIÓN, FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA

La lucha contra la Dictadura del general Franco y en defensa de la Democracia en España se libró en varios frentes, desde los conciliábulos políticos hasta las parroquias, pasando por la presión continua en las fábricas o las protestas en el ámbito de la educación. Posiblemente fue este último pulso uno de los más activos y emblemáticos, hasta el punto de que las “carreras ante los grises” y las asambleas ilegales en la Facultad marcaron a toda una generación. El empuje permanente de los opositores logró alterar el curso universitario, hasta el punto de obligar a cerrar facultades, suspender cursos enteros y arrastrar a los alumnos menos comprometidos, pero, como es sabido, no consiguió su fin último, que no era otro que el de derribar un Régimen que murió en la cama con su fundador, o incluso, formalmente, un año después, con la aprobación de la Ley para la Reforma Política (LRP).

La presencia constante de militantes y simpatizantes de la oposición, o la simple actitud reivindicativa de la juventud de la época, de cualquier juventud, obligó al Franquismo a mantener una permanente red de confidentes y agentes de información con el vano objetivo de adivinar, prevenir e impedir las protestas. El presente artículo analiza cómo fue el seguimiento y la vigilancia por parte de los servicios de información del Gobierno a todos estos grupos “subversivos”, y lo hace a partir de unos documentos que permanecían sin catalogar, los llamados Boletines de Situación, elaborados por el Servicio Central de Documentación (SECED), la agencia de inteligencia dependiente de Presidencia del Gobierno y antecesora del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Se elaboraban semanalmente, tenían una media de 50 páginas y estaban divididos en los cinco sectores en los que a su vez se organizaba el SECED: político, religioso, laboral, profesional y, el que nos ocupa y de especial importancia, el educativo. En la presente investigación se analizarán los 42 números

correspondientes al último año de la Dictadura. Su principal valor está en que eran información estrictamente confidencial y privilegiada, ya que se enviaban solo a las principales autoridades del Estado, desde Franco hasta el Príncipe Juan Carlos, pasando por el presidente del Gobierno, algunos ministros y determinadas autoridades militares. A partir de lo que en ellos se reflejaba, las autoridades tomaban sus decisiones y se hacían una composición de lugar lo más certera posible, máxime teniendo en cuenta que la principal virtud de estos confidenciales era que, a diferencia de otros informes, procuraban retratar la situación tal cual era, sin enmascararla y evitando cualquier “condescendencia” con el poder, lo que de hecho incluía en ocasiones críticas a las autoridades educativas.

En segundo lugar, el análisis del contenido de los Boletines de Situación permite hacer una aproximación, inédita hasta la fecha, de a qué grupos ilegales hacían un seguimiento los agentes infiltrados del Gobierno. El índice de detalle de los confidenciales es tal que en cada uno de ellos se especifica no sólo qué actos de protesta ha habido, sino los eslóganes, el número de personas que los ha secundado y el resultado.

2. ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS

Primera consideración: a diferencia de otros sectores en los que trabajaban los agentes de información, la relación de grupos y grupúsculos a los que persigue el SECED no está encabezada por una formación política o sindical, ni siquiera una organización educativa como tal, sino por el colectivo de los Profesores No Numerarios (PNN's), que de alguna manera reivindica un papel en esta obra coral de la Transición que no fue tan secundario como las reseñas posteriores parecen sugerir. A tenor de lo que trasladan los Boletines de Situación, este movimiento está presente en prácticamente todos los distritos universitarios y a lo largo de todo el curso académico. En los 42 boletines confidenciales que se elaboraron justo en el último año del Franquismo, de noviembre de 1974 a noviembre de 1975, está citado en 150 ocasiones, casi cuatro veces más que la segunda organización más mencionada.

En 1975 los PNN's representaban el 80% del profesorado total y muchos de sus miembros habían sido dirigentes estudiantiles en la década anterior (Powell, 2002). Sus reivindicaciones se centraban, sobre el papel, en la exigencia de un contrato laboral para estos docentes bajo la premisa de la autonomía universitaria, en las antípodas del dirigismo con

el que el régimen franquista condujo los destinos de la universidad. Como señalan Pilar Muñoz López y Ana Isabel Abelaira Huertos en el inventario que hacen para la Fundación Primero de Mayo del fondo donado por el profesor de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense Juan José Castillo, los PNN's "carecían de contrato y de la más mínima estabilidad laboral, cobraban un sueldo bajísimo o vivían de becas, estaban saturados de trabajo y veían cómo su situación se enquistaba a medida que transcurrían los años. La figura del PNN estuvo presente en la enseñanza media y universitaria desde 1963 y no desaparecería hasta finales de los ochenta" (Powell, 2002). Sin embargo, sus demandas abarcaban también la implantación de un régimen de derechos sindicales y laborales no sólo para la universidad, sino para toda la sociedad española. Democracia, en una palabra. Y ruptura con el antiguo régimen, en definitiva.

Después de este colectivo de profesores, la segunda organización más citada por los informantes que el SECED es, como no podía ser de otra forma, el PCE, que acapara 38 referencias, casi 10 veces más que las que acumula el Partido Socialista de Felipe González (4 citas), reproduciendo de esta forma la proporción (o desproporción, si nos atenemos al resultado electoral de 1977) que existía en la atención que el Gobierno prestaba a una y otra formación en el ámbito estrictamente político. La escasa atención que los informantes de la agencia de inteligencia prestaron al PSOE en el ámbito educativo es, en sí misma, una pista importante de la presencia que socialistas y comunistas tenían en la universidad española de aquella época. Pero el PCE no estaba ni mucho menos solo en esa labor de "incendiar" la universidad, en una prueba de que la popular "sopa de letras" de aquellos años tenía su traslación en el ámbito educativo. La Joven Guardia Roja (JGR), por ejemplo, es aludida por los espías en 21 ocasiones, frente a las 20 de la Junta Democrática, las 10 de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT) o las 7 del Partido del Trabajo de España (PTE). Por detrás, otras siglas como las de Comisiones Obreras (CC.OO.), la Unión General de Trabajadores (UGT) o la Liga Comunista Revolucionaria (LCR-ETA VI).

En conclusión, por tanto, podemos decir que los Boletines de Situación confirman la impresión generalizada de que fueron los grupos comunistas (con la salvedad ya mencionada de los PNN's) los encargados de mantener en permanente ebullición el ambiente universitario. Y que son ellos los que están detrás de la mayoría de los sabotajes y encie-

ros, de los pasquines y las asambleas, que con tanta dureza zarandearon el final del Franquismo. Los colaboradores del SECED que cada mañana acudían a las facultades a recabar información o a recopilar propaganda ilegal, a modo de notarios de la realidad, dan fe de ello en sus informes. No en vano, recordemos que la génesis de este servicio de información, y más en concreto de su predecesor, la Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), está en la universidad, y que fueron las protestas estudiantiles las que llevaron al régimen a crear este organismo en el seno del Ministerio de Educación que dirigía José Luis Villar Palasí. Como relata el propio José Ignacio San Martín, primer director del SECED, en 1968 se le encomienda el plan de controlar la “subversión estudiantil”. Para ello tenía que asesorar al ministro de Educación, de quien dependía, no implicar a nadie del Alto Estado Mayor (AEM) y buscar por su cuenta a informadores e infiltrados propios. Lo intentó primero con una “red de bedeles montada con guardias civiles retirados”, que fue fácilmente detectada y no dio resultado. Después, con profesores y alumnos. Del papel trascendental que el régimen concede a estos grupos opositores, infiltrados ya en todos los entresijos de la Universidad, dan fe las palabras que le transmite Villar Palasí en su primera reunión: “Usted viene a ayudarme a resolver el problema número uno del país. En su campo usted será el ‘superministro’; yo me pondré a sus órdenes y haré cuanto usted me pida”.¹

Parece claro que San Martín y sus hombres no fueron capaces de neutralizar a ese “monstruo” que había anidado en la universidad española, como lo demuestran los Boletines que redactaba este servicio seis años después de que se les encomendara aquella comprometida misión. Pero, ¿dónde estaba más arraigado el “problema”? ¿Cuáles eran los distritos universitarios más conflictivos? ¿Había algunos en los que el SECED pudiera transmitir buenas noticias (o ninguna noticia, que en este caso viene a ser lo mismo) al presidente del Gobierno y al ministro de Educación de turno? También para estas cuestiones tienen respuesta los Boletines de Situación, que confirman algunas evidencias y aportan algunas sospechas. Como era de esperar, Madrid es el distrito universitario más mencionado, seguido por los de Barcelona, Santiago de Compostela y Valladolid, este último en una proporción mucho mayor que la envergadura de sus facultades parecería sugerir. Veremos en breve por qué.

Por lo general, las menciones en los confidenciales serán de dos tipos. Las más habituales, para dar cuenta de un amplio abanico de incidentes. “Jornadas de lucha”, cierre de facultades, desalojos y propagan-

da subversiva serán términos que se repetirán semana a semana. Junto a ello, los confidentiales recogen las conferencias (o intentos de conferencia, antes de que actúe la fuerza pública) de algunos opositores que eligieron las aulas para dar, de forma ilegal o consentida, sus mítines más agradecidos. Casi por sistema, los redactores de estos confidentiales incluyen en su “Panorámica general” que abre el informe una referencia al estado de la universidad esa semana. “Anormalidad académica en Madrid, con ‘Jornada de lucha’ el día 20, motivada por el cierre de la Facultad de Filosofía y Letras. Más pena que gloria en las elecciones estudiantiles”, resume de forma lacónica el confidencial (21-27 de noviembre de 1974) que abre esta investigación (B.S.105, 1974). Pese a ser una semana tranquila, en páginas interiores se da cuenta de incidentes en seis distritos universitarios. Las elecciones estudiantiles, la constante reivindicación de los PNN’s y los altercados en las regiones más conflictivas esos días (Madrid, Barcelona, Sevilla) centran la atención del Ministerio de Educación antes de las vacaciones de Navidad. En el último mes, sin embargo, la atención se desplaza a Santiago de Compostela, “levantado en armas” y en una situación que el SECED no duda en tildar de “anarquía absoluta”:

Santiago de Compostela continúa siendo el Distrito de mayor agitación. En él es prácticamente nula la actividad académica y, a pesar de las medidas coercitivas que se han intentado aplicar, la anarquía es absoluta. Le sigue Madrid en la lista de los distritos con mayor índice de anomalías, paros y desalojos en Medicina de la Complutense -fundamentalmente- y paro de PNNs. en la Facultad de Filosofía y Letras. A estas dos Universidades hay que sumar la conflictiva e intransigente situación creada en Sevilla por los alumnos de Medicina, como protesta por la tardanza en la puesta en marcha del Hospital Clínico. Esto ha motivado detenciones, manifestaciones y asambleas, consiguiéndose, una vez más, que la postura de fuerza sea la única válida ante la Administración: el día 4 comienza a funcionar dicho Hospital. (B.S.106, 1974).

El Boletín repasa una por una las facultades gallegas paralizadas (Económicas, Matemáticas, Zoológicas, Citología e Historia de la Biología, Derecho, Filosofía), lo que permite al lector hacerse una idea certera de cómo estaba la situación. Tampoco tiene desperdicio la descripción que se hace –con insultos incluidos– de los incidentes en la Facultad

de Medicina de Madrid. No corren buenos tiempos para los profesores con menos popularidad entre el alumnado:

En Medicina, una de las facultades más tranquilas pero de más relevancia en el mundillo estudiantil, se ha llegado a la suspensión de clases. Esta vez el conflicto ha sido provocado, aunque ya venga de atrás, en el momento oportuno. Al profesor Gil Gayarre, que tiene fama de autoritario y déspota, se le ha ido enfrentando su curso -4º de Terapéutica Física- hasta llegar a la violencia física, sacándole a empujones y casi expulsándole del Hospital Clínico. Resultado: denuncia y detención. Como es lógico, porque todo estaba previsto, la respuesta ha sido unánime: el paro académico hasta que no se ponga en libertad a los detenidos y dimita Gil Gayarre. (B.S.105, 1974).

Santiago es, después de Madrid y Barcelona, el distrito universitario más conflictivo, seguido por los de Valladolid y Bilbao. Su presencia en los resúmenes es habitual, y en el caso de Madrid y Barcelona una “sección fija” que solo descansa en vacaciones. Un espejo, ni más ni menos, de lo que fue la agenda de las autoridades educativas de la época. El Gobierno de Arias y su ministro de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, son conscientes de que los incidentes en la universidad responden a una estrategia perfectamente orquestada por la oposición que se ha venido desarrollando desde dos décadas atrás. A mediados de los 60 el protagonismo había correspondido al PCE y al Frente de Liberación Popular (FLP, cuyos miembros eran conocidos como *felipes*), y tuvo su punto álgido en las protestas estudiantiles de 1965, que derivó en que conocidos profesores como Aranguren, García Calvo, Aguilar Navarro, Montero Díaz o Tierno Galván perdieran sus cátedras. Aquellos sucesos se revivieron, con mucha mayor virulencia, en 1969, con la muerte del estudiante del FLP Enrique Ruano y el estado de excepción declarado a continuación. Ya en la década de los 70 la actividad agitadora se acrecienta y, sobre todo, se disgrega en infinidad de grupos trotskistas, maoístas o izquierdistas en general que traen de cabeza a las autoridades. La otra premisa que tienen claras las autoridades franquistas es que la universidad era la cantera de la militancia política o laboral que vendría después, por lo que erradicarla en la raíz era fundamental. Después de entrevistar a decenas de opositores al Franquismo, José María Maravall ha concluido que esto era así. A diferencia de otros países, el activismo político estu-

diantil no era esos años en España algo transitorio, sino que estos militantes eran ya “no recuperables”, en la terminología de la Dictadura, hasta el punto de que “no era extraño que antiguos dirigentes estudiantiles pasaran a importantes puestos en los partidos de izquierda clandestinos”. (Maravall, 1978) Las organizaciones que protagonizan las páginas de la actividad clandestina de los Boletines de Situación son las mismas que firman la propaganda que siembra la universidad y convocan a los estudiantes a una jornada tras otra de lucha. Muchas veces, esta “contaminación” subversiva escondía otro problema de la educación española, el de la escasa financiación. Pese a que la reforma de 1970 había elevado la dotación presupuestaria para hacer frente a un boom en demanda de educación que ya se presentía, en 1976 España sólo dedicaba a educación el 2,25 del PIB, la mitad que en los países de nuestro entorno.

El enemigo está claro, y por eso se señala a una serie de líderes que tienen más de agitadores que de estudiantes. “Hay que destacar las intransigentes y descaradas posturas adoptadas por ciertos estudiantes, conocidos activistas, que, elegidos representantes de centro o distrito, intentan provocar la dimisión de ciertas autoridades académicas, como el Decano de la Facultad de Económicas de Málaga y el Rector de la Universidad de Murcia, ante la total pasividad de catedráticos y profesores y con el consiguiente deterioro de la autoridad y disciplina académicas”, se lamentan los agentes de inteligencia el 22 de enero. (B.S.111, 1975) Pero, realmente, ¿cuántos estudiantes “subversivos” había en las aulas españolas? Según el *Libro Blanco de Orden Público Nacional* de noviembre de 1975, que citan Sartorius y Sabio, la Policía tenía fichados en toda España a 2.500 “estudiantes plenamente subversivos”, activistas permanentes, que son el 1% del total de matriculados. A ellos se une el grupo más peligroso, el de los alumnos fuertemente ideologizados que secundan las consignas lanzadas, y que representan entre el 5 y el 30% del alumnado de las facultades. En Barcelona, por ejemplo, son el 30%, en Madrid, Valencia y Zaragoza el 25% y el 20% en Bilbao. En distritos en agitación permanente, como Santiago o Valladolid, apenas suponen el 10%. A la mitad de ellos, la Policía los consideraba “comunistas ortodoxos” (Sartorius, 2007). Con todos tendrán que lidiar las fuerzas del orden.

El primer trimestre del curso 1974-75 terminará de forma abrupta con la “Jornada de lucha” del 11 de diciembre, en defensa de los derechos del pueblo vasco, y que los propios agentes de inteligencia admiten que triunfó en el ámbito laboral, aunque con lo matices en el educativo. La

actividad en las facultades es esa última semana mínima, pero no parece que todos los alumnos que no han asistido a clase lo hayan hecho en solidaridad con el independentismo vasco.

La convocatoria para la “Jornada de lucha” el pasado día 11, como solidaridad con el separatismo vasco, tuvo, en este ámbito, efectos más ruidosos que alarmantes en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa. Estos efectos, aun cuando tuvieron fases agudas que obligaron a las FOP a cargar en varias ocasiones para disolver algunos grupos de manifestantes, se limitaron a “paros” e “inasistencias” a clases en numerosos centros de enseñanza y desalojos en otros. Los motivos no fueron tanto la “solidaridad”, convocada por ORT y MCE, como el clima de temor creado en el pueblo, en general, por la propaganda y los anuncios de colocación de explosivos. En la mayor parte de los distritos universitarios, la inasistencia a clase ha aumentado de tal manera que en algunos se puede afirmar, que han empezado las vacaciones navideñas. La actividad académica ha quedado prácticamente reducida a la celebración de exámenes parciales. (B.S.108, 1974)

En Madrid, de hecho, el Boletín califica de “absoluto fracaso” la convocatoria, y destaca que la decisión de las Fuerzas de Orden Público (FOP) de pedir los carnés a las puertas de las Facultades (el famoso “con los carnés en la boca” que tan célebre se hizo entre los universitarios españoles en aquella época) ha desanimado a los estudiantes menos resueltos. Con todo, pone en guardia a las autoridades: los distritos con problemas “enquistados” no han hecho más que aparcar las demandas con la llegada de las vacaciones navideñas. El nuevo trimestre, augura, será “caliente”.

El pesimismo de los responsables del SECED se verá refrendado en el nuevo año por culpa, como tantas otras veces, de un hecho concreto. La mecha se enciende por el juicio el 20 de enero de 1975 contra un estudiante de Magisterio de la Universidad de Valladolid, José Luis Cancho Beltrán, militante de la JGR, que mientras estaba detenido cayó por la ventana de la comisaría, bien porque le arrojaron los agentes o bien porque él mismo se tiró.² Los estudiantes vallisoletanos, y por extensión los de otras muchas ciudades españolas, tienen ya a su símbolo de la represión franquista. El juicio crea una corriente de solidaridad que se traduce, primero, en un sinfín de asambleas y clases suspendidas durante los días

15 y 16 de enero. Después, en la convocatoria en la Facultad de Medicina de un recital no autorizado de la cantautora Elisa Serna,³ que la Policía prohibió pero que los organizadores trasladaron al edificio de Filosofía y Derecho, bajo la sombra de otras 11 detenciones de estudiantes por parte de las Fuerzas de Orden Público. Al día siguiente, el rector ordena el cierre de la universidad hasta el día 29. Las universidades madrileñas son las primeras en recoger el guante de las protestas, con el reparto de abundante propaganda para invitar a los alumnos a desalojar las aulas el día 20 y organizar una marcha hasta la Plaza de las Salesas, donde había de celebrarse el juicio contra Beltrán. La Policía tiene que emplearse a fondo para impedirlo: “El desalojo ha sido masivo pero no en todas las Facultades, llegando a dicho lugar algunos grupos, habiéndose efectuado algunas carreras al ser disueltos y realizándose algunas detenciones por parte de las FOP”. (B.S.111, 1975) Cancho fue condenado a cuatro años de prisión por asociación ilícita y propaganda ilegal, algo menos de lo que pedía para él el fiscal.⁴

La semana siguiente los Boletines muestran la imposible normalidad de las facultades de Madrid, con cierres intermitentes y protestas continuas, y la de Valladolid, donde hay encierros de alumnos exigiendo al rector la reapertura inmediata de la universidad, con las consiguientes cargas y detenciones por parte de la Policía, y posteriormente su dimisión. A ellos se une Murcia, afectada por un paro total para reclamar al Ministerio el cese de su máximo representante. La desazón comienza a cundir entre los dirigentes del SECED, que levantan la voz ante la que consideran estrategia equivocada del ministro de Educación, Cruz Martínez Esteruelas. Tenemos aquí un ejemplo de la versión crítica del servicio de información:

En Madrid y Barcelona, la ‘idea-fuerza’ que los grupos más extremistas buscaban para caldear los ánimos y lograr el posterior enfrentamiento con las FOP la han encontrado: dichas fuerzas penetraron en los centros docentes para retirar carteles de matiz claramente subversivo, en horas de clases. Si bien son ciertas la impotencia, muchas veces, e inhibición, otras, de las autoridades académicas para evitar la colocación y permanencia de los carteles en aulas y pasillos, no es menos cierto que la entrada indiscriminada de las FOP a retirar los crea malestar y tensión en profesores y alumnos, al tiempo que desgasta a dichas fuerzas que, a la larga, serán provocadas por profesionales de la agitación. Todo ello para retirar unos carteles a los que el alumnado presta escasa atención” (B.S.113, 1975).

En contra de opiniones más intransigentes de miembros del Gobierno, los agentes de inteligencia piden, por tanto, que cese el espectáculo cotidiano de un grupo de policías entrando en las facultades, como elefante en cacharrería, para retirar carteles subversivos, y que en su lugar se haga la *vista gorda*. De hecho, una semana después los universitarios convocan una jornada de repulsa “hábilmente explotada por la Prensa” para protestar por esta presencia policial. Como resultado, “un paro casi total en la Universidad Complutense, excepto Farmacia y Medicina y parte de Ciencias de la Información. A las 11 horas hubo un desalojo masivo, concentrándose por grupos en los alrededores de la Moncloa. Hacia las 12 saltó un grupo de unos 500 en el ‘Corte Inglés’ de la calle Princesa, esquina Alberto Aguilera, dando gritos contra la represión y cortando la circulación. A las 12,20 unos 300 se concentraron en la esquina de Menéndez Valdés-Hilarión Eslava, siendo disueltos por las FOP” (B.S.114, 1975).

Todo esto no es más que el aperitivo de lo que va a ocurrir el 8 de febrero. Ese día, y después de que se haya llegado “a la total y absoluta vejación de la autoridad académica, con agresión a su más representativa figura, el Rector, sin que esta situación conllevara una enérgica repulsa de la sociedad y una llamada al orden a los universitarios”, el ministro Martínez Esteruelas ordena el cierre de cuatro Facultades hasta el curso 1975-76, (B.S.114, *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto*, 1975) lo que supone la pérdida de la matrícula para 8.000 alumnos. A ella le sucederán cierres indefinidos en Sevilla, Málaga o Salamanca. “La universidad está ya perdida para el régimen”, zanja Prego. Salvo los violentos “guerrilleros” no hay organizaciones de derechas en las aulas, que están tomadas por los grupos de izquierda (Prego, 1995). “Las universidades mantuvieron un estado de agitación constante que el ministro de Educación, Cruz Martínez Esteruelas, no consiguió atajar (...). La huelga se extendió por todo el país, en parte como respuesta a la deteriorada situación económica, pero también con una dimensión política inequívoca. Las principales huelgas afectaron a la industria de la construcción en Madrid y a las fábricas metalúrgicas de Cataluña”, recuerda Paul Preston (Preston, 2001).

La decisión genera una ola de protestas en varias facultades y más peticiones de ceses de rectores, como el de la Autónoma de Barcelona. Es, según la interpretación del SECED, “un claro reto al Ministerio, al que intentan forzar a continuar los cierres para ocasionar el colapso de la enseñanza” (B.S.115, 1975). El 20 de febrero, el vehículo para mantener este ambiente de agitación es la celebración de una nueva “Jornada de lu-

cha” previa a la tan deseada huelga general. Sostiene el SECED que en la mayor parte de España la convocatoria “fue un rotundo fracaso pese a la numerosa propaganda lanzada”, lo que atribuye no tanto a una reacción contraria a las demandas planteadas, que no advierte por ningún lado, sino a cierto “cansancio” y a la celebración de exámenes. En Madrid y Barcelona, sin embargo, “la actividad académica fue prácticamente nula”, y se registraron numerosos incidentes entre los *grises* y los estudiantes tanto dentro como fuera del campus (B.S.116, 1975).

Pero la reseña más interesante de este confidencial la encontramos justo a continuación. La estrategia subversiva consigue un pequeño éxito, bajo la premisa del “divide y vencerás”, al lograr que la Junta de Gobierno de la Facultad de Derecho de la Complutense publique una nota “de destemplado estilo y en la que se critica con extremada dureza la intervención de las FOP en la Universidad”, escribe el redactor del Boletín, lo que “introduce un nuevo agravamiento a la situación conflictiva en que se encuentra la Universidad. La nota se estima desproporcionada e inoportuna y evidencia, asimismo, la separación entre los distintos niveles de la autoridad académica” (B.S.116, 1975).

En las semanas siguientes, los Boletines irán desgranando los detalles de lo que denominan “anormalidad académica”, a golpe de “Jornadas de lucha” (a la del 20 de febrero se unen las de 26 del mismo mes y el 5 de marzo) que son “un claro intento de mantener el estado de agitación continuo y encaminado a la consecución de una huelga general en la enseñanza” (B.S.116, 1975), así como los intentos del PCE de aglutinar en torno a sí todas las acciones de protestas, algo que impedirá la continua aparición de nuevas siglas y grupúsculos.

Con el campus de Valladolid, son los distritos de Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela los que reciben una mayor atención de los Boletines. La crónica semanal habla de facultades cerradas por todo el país y centros en los que, a duras penas, se va manteniendo la normalidad. En primavera, la confluencia del primer aniversario de la revolución portuguesa (“revolución del clavel”, como se denomina en los Boletines de Situación) con el Primero de Mayo hace inevitable que la conflictividad en la universidad española se eleve. Mientras los actos de protesta por el día del trabajo apenas causan problemas, la efeméride del país vecino es reflejada de una forma muy gráfica por parte del confidencial del SECED, que deja constancia de una dura acción de respuesta de la Policía:

Se registró en casi todos los distritos una gran profusión de propaganda, panfletos, carteles y letreros, banderas portuguesas, republicanas y comunistas, venta de claveles rojos y “actos culturales” programados que, en su mayoría, no llegaron a celebrarse por la decidida actuación de las FOP. Esta especie de “carnavalada” arrojó un buen balance de detenidos que ha enconado aún más la habitual situación conflictiva (B.S.124, 1975).

A partir de ese momento, el período de exámenes y las vacaciones centrarán la atención de los responsables educativos. Las protestas que retumban esos días en las calles y en las fábricas son apenas un eco en los pasillos casi desiertos de las universidades, pese a los intentos de los grupos subversivos por mantener la tensión. Las miradas están ya puestas, casi exclusivamente, en si las reivindicaciones de los PNN’s permitirán o no a los alumnos examinarse. Aun así, el Gobierno aprovechará el penúltimo Consejo de Ministros de junio para aprobar un decreto-ley que endurece las sanciones para las actividades ilegales en la Universidad y que limita a siete años el tiempo máximo para terminar una carrera (fuertemente criticado por los alumnos de la Politécnica). (B.S.132)

Pero no perdamos de vista la gran disparidad del nivel de conflictividad que arroja el mapa universitario de aquel año, con distritos que ni siquiera merecieron una sola mención de incidentes en los Boletines del SECED frente a otros en los que la alteración del ritmo educativo era la tónica. En cualquier caso los Boletines de Situación sirven para comprobar hasta qué punto las facultades se habían convertido en un continuo peregrinar de políticos. Los dirigentes de la oposición sabían que tenían en la cantera de universitarios a los posibles votantes del mañana, y por eso siempre que podían (pocas veces lo lograban) intentaban sortear el celo de las autoridades. Claro que, si uno es catedrático, la cosa es más fácil. A finales de 1974 encontramos ya al presidente de Justicia y Paz, Joaquín Ruiz-Giménez, haciendo apología de su campaña de firmas en pro de la amnistía para los presos políticos. Lo hace con una conferencia en la Facultad de Derecho de la Complutense, a la que el Boletín le pone los puntos sobre las íes: “Una vez más, vuelve a producirse el aprovechamiento por parte de un catedrático de la formidable plataforma que representa su cátedra y su ascendiente en la Facultad para exponer sus ideas políticas”. (B.S.105, *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto*, 1975) Por las páginas de los Boletines desfilan también profesores como

Gregorio Peces-Barba, que participa activamente en algunas de las reuniones estudiantiles, o los portavoces de la propaganda de la JD, que en la primavera toman de Justicia y Paz el relevo de la apología y se adentran en las aulas para lanzar su mensaje. El Boletín del 23 de abril se rinde a la evidencia:

El despliegue propagandístico de la Junta Democrática el pasado día 16 en las tres Universidades de Madrid, puede calificarse como una espectacular culminación de la sistemática campaña iniciada semanas atrás: carteles, pintadas y una masiva distribución en mano de propaganda, precedieron y acompañaron a numerosos portavoces universitarios de la referida Junta, que, aula por aula, fueron exponiendo ante los alumnos su programa político, en medio de una notoria tolerancia por parte del profesorado y autoridades académicas y sin que interviniera la Fuerza Pública. También en Santiago y Salamanca se han difundido propaganda de este tipo (B.S.123, 1975).

Las chispas (no hacían falta demasiadas) que encendían el fuego en la universidad eran muchas veces las demandas laborales que unos metros más allá enarbolaban los obreros despedidos o en huelga. Además de catedráticos y políticos, por las asambleas estudiantiles pasarán a menudo líderes sindicales o portavoces de los trabajadores para unir a los universitarios a su causa. Una prueba es el “hecho” al que se refiere esta mención de los Boletines: una asamblea en la facultad de Derecho de la Autónoma de Barcelona en la que un obrero de Motor Ibérica disertó sobre el despido de 80 compañeros e hizo una colecta para ayudar a las familias (B.S.105, *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto*, 1975)

Mientras, en el País Vasco, detrás de las alteraciones en el ritmo académico está en muchas ocasiones ETA, que presiona para paralizar las clases. “Hay que resaltar el éxito conseguido por ETA V en la región Vasco-Navarra, al lograr el paro en numerosos centros de enseñanza a los que incitó a realizarlo como señal de protesta y apoyo por la situación de los presos políticos y el aniversario del Consejo de Guerra de Burgos”, reza el confidencial número 106, cerrado el 4-12-1975. (B.S.106, 1974) Más cercana en el tiempo es la agitación de las universidades vascas para evitar el “asesinato” de los etarras Garmendia y Otaegui, que monopoliza la propaganda subversiva de la semana del 18 de agosto. (B.S.131, 1975) En la mente de los agitadores universitarios hay siempre

un hueco para los presos políticos. “En el tablón de anuncios de la Facultad de Filosofía y Letras, Rama de Psicología, se encuentra expuesta la ‘Carta’ que dirige el sacerdote Xirinach al Caudillo”, relata el Boletín del 5 de febrero. (B.S.113, Ámbito educativo.-Resumen de noticias, 1975) También para los que han muerto en Consejos de Guerra (propaganda para convocar ante el cementerio de Barcelona un acto en recuerdo de Puig Antich) (B.S.117, 1975) o en enfrentamientos con la Policía, como un empleado de Fenosa en Vigo cuyo fallecimiento solivianta a la universidad gallega. (B.S.126, 1975) Y, por supuesto, para las reivindicaciones democráticas en cualquier parte del mundo, ya sea Portugal, Chile o incluso Indochina, o para protestar airadamente por la visita del presidente de EE.UU., Gerald Ford, a España, con lanzamiento de octavillas por las calles de Zaragoza. (B.S.129, 1975)

Frente a tanto ruido externo, la agitación en la educación tiene, como hemos visto, un componente puramente de consumo interno. Desde finales de año, la causa de los PNN’s está diseminada por las páginas del ámbito educativo de los Boletines de Situación. Cambian los distritos en los que se hacen paros intermitentes, pero las reivindicaciones son las mismas, y no solo en la universidad, sino también en la enseñanza media. El Ministerio de Educación tiene un problema abierto de par en par que se une al ya esperado de la subversión. Precisamente porque es distinto al resto, porque detrás del acrónimo PNN no encontramos agazapados los habituales PCE, PTE o FRAP, el tratamiento que se le da en los Boletines es también diferente. Aquí no hay, al menos por el momento, riesgo alguno de subversión marxista, y los agentes del SECED se cambian a la acera de en frente del Gobierno para darle un toque de atención: “No se ha dado solución alguna al problema de los PNN’s de Enseñanza Media: existe la posibilidad de un paro a nivel nacional, problema grave, si además se considera que muchas de sus reivindicaciones parecen ser justas”, recoge la “Panorámica general” del Boletín del 15 de enero. “Es urgente la solución de aquellas peticiones justas de dicho estamento –se abunda en páginas interiores–, para evitar el colapso que produciría en este nivel de la enseñanza un posible paro a nivel nacional, teniendo en cuenta que los no numerarios constituyen una abrumadora mayoría de este profesorado”. (B.S.110, 1975)

Veamos algunos datos generales para comprender el fondo del problema. El cuerpo de PNN’s (conocidos coloquialmente como *penenes*) estaba conformado por profesores interinos y contratados. A mediados

de los años 70, los propietarios de sus cátedras eran algo más de la mitad del profesorado, mientras que los no numerarios representaban el 40 por 100. Pero mientras en el tramo de la EGB los PNN's apenas llegaban al 20% de la plantilla, en las facultades universitarias suponían 4 de cada 5 profesores, y el 86% del total en las escuelas universitarias. De esta manera, cuanto más elevada es la enseñanza, mayor es la proporción de PNN's, a lo que se une que según se suben peldaños en esta escalera educativa, mayor es la diferencia salarial del PNN con sus compañeros. "Esto nos hace pensar que una de las explicaciones de esta situación es la económica. El MEC ha ahorrado unos millones de pesetas manteniendo la condición de eventualidad e interinidad de una enorme proporción de docentes, al mismo tiempo que conseguía un control más fuerte sobre ellos (...) Parece evidente que situaciones como éstas, cuando al mismo tiempo existen plazas provistas sin titular y no se convocan oposiciones por largo tiempo –como fue el caso de las oposiciones restringidas para maestros interinos durante cinco años– tienen que provocar reacciones y actitudes que a la larga van en contra de la misma enseñanza, de su calidad y rendimiento y de su renovación". (FOESSA, 1981) A los agravios salariales se unen su precaria situación laboral (el contrato podrá ser resuelto en cualquier momento por la Administración y no incluye el seguro de desempleo) y su nula participación en las decisiones que afectan a la vida universitaria, ya que no disponían de los cauces para ello,⁵ por no hablar de que debían hacer frente a unos recursos globales en la universidad que no estaban acordes con las necesidades. En 1975, el gasto por universitario no llegaba a la tercera parte de la media europea, ya que las dotaciones no habían crecido en la misma proporción que una población universitaria que pasó de 105.000 alumnos en 1966 a 600.000 en 1977 (Sartorius, 2007).

Todo ello había sido un caldo de cultivo que estalla en estos meses. Pese a que desde los Boletines se respaldan estas movilizaciones, en marzo comienzan a apreciarse signos de impaciencia en los encargados del sector educativo del SECED. Un cambio de estrategia (implicar en sus protestas al alumnado) permite atisbar un conflicto de grandes magnitudes que no es bien recibido: "Con su postura intransigente, colabora a la paralización de la vida académica en ambos distritos [Barcelona y Santiago]. Además, buena parte de este profesorado anima al alumnado a continuar la lucha, lo cual, unido a la impotencia e inhibición de las autoridades académicas, ha suspendido totalmente la actividad docente en

las citadas Universidades” (B.S.118, 1975). A pesar de ello, una semana después se elogia el hecho de que hayan puesto sobre el papel una serie de propuestas “al margen de toda intencionalidad política negativa” (B.S.118, 1975), algo que desde luego no se aplica nunca al resto de organizaciones.

Tras las vacaciones de Semana Santa, la situación de los PNN’s —advierte el SECED— “se ha hecho crónica” y amenaza con convertirse en la punta de lanza de la pretendida huelga general. Los paros habituales de Barcelona y Santiago, epicentro estas semanas de la indignación de este profesorado, se han ido extendiendo a otros distritos, y la consigna es ir a un paro general en toda España (B.S.122, 1975). Tan solo tres universidades no respaldan la huelga de los días 16, 17 y 18, que se cierra con una reunión en la Facultad de Derecho de la Complutense, a la que asisten representantes de toda España, que huele a ultimátum ante la inminente reunión con el Ministerio: “Las conclusiones que se expusieron en la citada reunión fueron: paro activo indefinido, hasta conocer la decisión del MEC ante sus peticiones y, caso de no ser atendidas, celebrar una nueva reunión el 23 de Mayo, para atrasar los exámenes hasta el 15 de Junio o ir a la huelga general” (B.S.123, 1975). El encuentro, sin embargo, concluye en fracaso, y la semana siguiente se anuncia ya que los PNN’s barajan dos opciones: o la huelga en plenos exámenes de junio o el aprobado general.

Así las cosas, los temidos exámenes de junio llegan para unos y otros con la “casa sin barrer”. El Boletín del 28 de mayo refleja con precisión la situación de desconcierto reinante:

La decisión de hacer caso omiso a las advertencias del Ministerio y de inhibirse en los exámenes, adoptada en la última reunión de la Coordinadora Nacional de PNNs, no se ha reflejado, hasta ahora, en una clara postura de unanimidad de este estamento del profesorado. Algunos PNNs han comenzado los exámenes, otros los han aplazado, tomándose un compás de espera hasta saber la decisión del MEC respecto a sus reivindicaciones en los primeros días de Junio. Los menos, han decidido no celebrar exámenes (Económicos en Santiago de Compostela) o dar “aprobado general” (Universidad Autónoma de Barcelona) (B.S.128, 1975).

Las aguas volverán finalmente a su cauce en todas las facultades menos en la catalana de Bellaterra. A la vuelta del verano, sin embargo,

quedará claro que el problema se había cerrado en falso. Para unos y para otros el reinicio del curso vendrá marcado por la espiral que provoca la condena a muerte de los terroristas en los Consejos de Guerra de septiembre. La agenda de la universidad se escribe a partir de entonces, como en todo el país, al compás de lo que marcan las últimas páginas del Franquismo. Y los Boletines serán el reflejo de los incidentes diarios en las facultades hasta que también aquí, como en todo el país, se contenga la respiración en los últimos días de Franco.

3. CONCLUSIÓN

Atrás de todo lo dicho queda la conclusión que se puede extraer del papel que jugó la oposición en la educación en el último año del Franquismo, vista a través de los ojos de los agentes de inteligencia al servicio de la Dictadura: tal y como desvelan los informes del SECED, los tan valorados Boletines de Situación, el régimen franquista tenía una referencia detallada de la magnitud del “incendio” en las aulas, con todo lujo de detalles, pero precisamente las proporciones de esta protesta generalizada hicieron imposible impedirla.

Por ello, los informes confidenciales que recibían las autoridades eran tan profusos en cifras y nombres, pero también por eso a duras penas las consecuencias de las acciones de protesta eran remediadas por el poder.

Y un segundo matiz no menos importante: la lectura detallada de los informes de los servicios de inteligencia nos permite hacer un relato alternativo y de importante valor documental sobre la actividad opositora en las aulas, un recorrido, en definitiva, por el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué sustanció la protesta contra la dictadura en España en el último año de vida de Franco.

Notas

1. Para una información más completa sobre la vinculación del SECED y la universidad, ver SAN MARTÍN, José Ignacio: *Servicio Especial: a las órdenes de Carrero Blanco*, Barcelona, Planeta, 1983, págs. 22-42.
2. “Me tiraron por la ventana porque pensaban que me habían matado”, declaró posteriormente Cancho, que denunció años después la brutal tortura que sufrió a manos de cuatro agentes de la Brigada Político

- Social, y que le causó varias roturas. Los agentes fueron procesados dos años después por este hecho, pero no se beneficiaron de la Ley de Amnistía de 1977 (<http://www.ultimocero.com/no-olvidamos/me-tiraron-porque-pensaban-que-me-hab%C3%ADan-matado>, consultado el 21-07-2013).
3. Fue uno de los exponentes de la canción protesta. Las letras de sus canciones le llevaron en 1974 a ser encarcelada en la prisión de mujeres de Alcalá de Henares por negarse a pagar la multa de 200.000 impuesta por la autoridad (*Informaciones*, 11-03-1974).
 4. En el juicio contra los “supuestos comunistas vallisoletanos”, como titula *ABC*, el fiscal pide para Cancho seis años de cárcel por asociación ilícita, y recuerda que cuenta con antecedentes por un delito de propaganda ilegal (*ABC*, 21-1-1975, pág. 36).
 5. Las de los PNN’s no serán las únicas demandas que recogerán los B.S., que en febrero dejan constancia del “descontento entre los bebedes y personal subalterno de la Complutense por la supresión de las gratificaciones que venían percibiendo y por los atrasos que les adeudan a pesar de haber ganado el recurso ante los tribunales” (B.S. núm. 116, “Ámbito educativo.-Resumen de noticias”, pág. 3).

Referencias Bibliográficas

- B.S.105. (1974). *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto*.
B.S.105. (1974). *Panorámica general*.
B.S.106. (1974). *Ámbito educativo.-Resumen de noticias*.
B.S.108. (1974). *Ámbito educativo.- Impresión de conjunto*.
B.S.110. (1975). *Panorámica general*.
B.S.111. (1975). *Ámbito educativo.- Impresión de conjunto*.
B.S.111. (1975). *Ámbito educativo.- Resumen de noticias*.
B.S.113. (1975). *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto*.
B.S.113. (1975). *Ámbito educativo.-Resumen de noticias*.
B.S.114. (1975). *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto*.
B.S.114. (1975). *Ámbito educativo.-Resumen de noticias*.
B.S.115. (1975). *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto*.
B.S.116. (1975). *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto*.
B.S.117. (1975). *Ámbito educativo.-Resumen de noticias*.

- B.S.118. (1975). *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto.*
- B.S.122. (1975). *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto.*
- B.S.123. (1975). *Ámbito educativo.- Impresión de conjunto.*
- B.S.124. (1975). *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto.*
- B.S.126. (1975). *Ámbito educativo.-Resumen de noticias.*
- B.S.128. (1975). *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto.*
- B.S.129. (1975). *Ámbito educativo.-Resumen de noticias.*
- B.S.131. (1975). *Ámbito educativo.- Impresión de conjunto.*
- B.S.132. *Ámbito educativo.-Impresión de conjunto.*
- FUNDACIÓN FOESSA. 1981. **Informe sociológico sobre el cambio político en España 1975-1981.** Euroamérica. Madrid (España).
- MARAVALL, J.M. 1978. **Dictadura y disentimiento político. Obreros y estudiantes bajo el franquismo.** Alfaguara. Madrid (España).
- POWELL, Ch. 2002. **España en democracia, 1975-2000.** Plaza y Janés Bolsillo. Barcelona (España).
- PREGO, V. 1995. **Así se hizo la Transición.** Plaza y Janés. Barcelona (España).
- PRESTON, P. 2001. **El triunfo de la democracia en España 1969-1982.** Plaza y Janés. Barcelona (España).
- SAN MARTÍN, J.I. 1983. **Servicio Especial: a las órdenes de Carrero Blanco.** Planeta. Barcelona (España).
- SARTORIUS, N. y SABIO, A. 2007. **El final de la dictadura: la conquista de la democracia en España.** Temas de Hoy. Madrid (España).